

dades entre el ala izquierda de Miquel Roca Junyent, al que se le ha atribuido tradicionalmente una voluntad de compromiso más o menos histórico con los comunistas y socialistas, y el ala derecha, representada por el profesor Ramón Trias Fargas, que ha fijado la obtención de la Alcaldía barcelonesa como meta irrenunciable.

Tal vez Ramón Trias, desde la Alcaldía, tuviera la tentación de erigirse en un elemento de recomposición de la burguesía catalana dispersa como UCD sugiere y empuja. Pero el propio Pujol teme esa posibilidad, que llevaría a la pérdida de equilibrio en el interior de Convergencia sin descartar un eclipse de la figura mítica de Pujol.

Entre tanto, los sectores de capital de un sector de la burguesía moderna catalana, que teme el nacionalismo de Pujol y que se reclama giscardiana—Güell, Molins, Mas Cantí, y el propio Carlos Ferrer Salat—, apuesta por la coalición centrista de Cataluña-UCD. Por su parte, aquellos sectores relacionados con el Opus Dei—Banco Atlántico, etc.— seguirían el tránsito generalizado de los sectores opusdeísticos desde Alianza Popular, en la que figuraban López Rodó y López Bravo, hacia el partido de Adolfo Suárez. A nivel de voto popular, esta traslación tendría su concreción en Cataluña también favorable a UCD. Se asegura que en los ambientes influidos por la Obra se recomendó el 15 de junio el voto favorable a López Rodó o al democristiano Antón Cañellas, esta vez segundo de la lista ucedista por Barcelona.

Debilitada ahora la Coalición Democrática por Barcelona—que con López Rodó resulta frágil en la prensa democrática, pero no tanto en el terreno concreto del empresariado—, y confusa la situación en el interior de Convergencia Democrática, el empresariado medio catalán—el que se siente representado por Fomento del Trabajo, o por la Cámara de Comercio o por la actual dirección del C. F. Barcelona— puede terminar apoyando a la UCD, más que por convencimiento, por exclusión del resto de opciones que se le ofrecen. Paradójicamente, UCD trató de articular la burguesía catalana en su favor y no lo logró, pero puede obtener el apoyo transitorio de amplios sectores de esa misma burguesía, aunque sea como producto del desconcierto en el que está sumergida y de su incapacidad para darse a sí misma una solución. ■

Navarra

QUEDA EL REFERENDUM

El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó un Real Decreto-Ley sobre "elecciones y ordenación de las instituciones forales" que había sido firmado el día anterior en el palacio de la Moncloa en un acto presidido por el señor Suárez. El acto tuvo mucho de propagandístico y así lo evidenció el tratamiento que la televisión del Estado le otorgó: segunda noticia del Telediario de la noche, tras la visita del Papa a Latinoamérica. El vicepresidente de la Diputación Foral, don Amadeo Marco, hizo unas declaraciones de las que se deducía que Navarra ha resuelto su problema autonómico, porque, en definitiva, no necesitaba que se le otorgara estatuto alguno, ya que sus derechos son históricos e irrenunciables.

Lo cierto es que, a pesar del despliegue propagandístico, el problema de Navarra sigue sin solución. Hay que tener en cuenta que el acuerdo entre el Gobierno y la Diputación Foral se ha hecho al margen de las fuerzas democráticas navarras (los proyectos presentados a principios del pasado año por el PSOE y por los partidos "abertzales" no se tuvieron en cuenta, y las negociaciones, que en un principio se acordó fueran entre el Gobierno, la Diputación y los parlamentarios, acabaron siendo un cambalache entre el Ministerio de Martín Villa y el búnker franquista-navarrero del organismo foral).

Sigue pendiente el máximo problema, que, aunque duele, está envenenando la vida social y política del viejo Reino: la integración o no de Navarra en los entes autonómicos vascos, es decir, si Navarra quiere ser Euskadi o no.

En unas declaraciones del ministro para las Regiones, hechas a principios de la pasada semana a "Europa-Press", el señor Clavero reconocía que el problema de Navarra había sido el más grave y de más difícil solución de cuantos había tenido que resolver su Ministerio. Su tibia y confusa actuación no ha servido para nada.

El tema da para mucho. No es ninguna exageración decir que casi es imposible resolverlo. Frente a los dos grupos encontrados—navarristas y vasquistas— está la mayoría de la población, que duda, atónita ante lo que se le viene encima, entre una solución y otra. Los periódicos, la televisión y el Gobierno tienen sumo cuidado en no hablar nunca de las cuatro provincias vascas. Se olvidan que una especie de unificación se hace palpable cada día que pasa: la integración por la re-



Monumento a los Fueros, en el paseo de Sarasate, de Pamplona.

presión. Insisten en decir País Vasco "y" Navarra, pero cuando deciden enviar más policías, más brigadas antiterroristas, hacer cachos por las calles, controles en las carreteras, las cuatro provincias se uniformizan, quiérela o no Martín Villa. La problemática terrorista se extiende incluso a la Ribera. A pesar de que en muchos pueblos fronterizos se puede leer: "Está usted en Navarra" y debajo, con "spray", "Euskadi, a 180 km."; la pasada semana, en Cascaute, en Tudela y en otras localidades, el orden público tenía los mismos problemas que en cualquier pueblo de Gulpúzcoa o Vizcaya (presunto militante de ETA muerto en Tudela por la Policía, detención de varios comandos "de información" de la organización armada independentista, etcétera).

El último día del año 1977, en el palacio de las Cortes españolas, tuvieron lugar unas vergonzantes negociaciones entre los di-

putados navarros de UCD y los del PSOE y PNV. Se llegó al acuerdo—que se llamó de Madrid— de hacer un referéndum entre el pueblo navarro una vez que, celebradas las elecciones municipales, los organismos e instituciones forales fueran democratizados. Estaba por entonces la polémica sobre la integración en Euzkadi en el punto más fuerte. El búnker navarrista, al mando de Amadeo Marco (desde que la mayoría de los navarros tienen memoria siempre ha estado en la Diputación mandando), había fracasado en su manifestación antivasquista del 3 de diciembre. Después vino el ataque fascista de mayo sobre Pamplona y después los sucesos de San Fermín y todo lo demás. Martín Villa, aprovechando la coyuntura, hizo su propio proyecto de democratización, que es el que fue firmado la pasada semana en Madrid (uno se pregunta por qué el pacto—que dicen sustituye y mejora la Ley paccionada de 1841— no se firmó en el palacio Foral de Pamplona, si Amadeo Marco y su camarilla son tan foralistas que hasta reclamaron en un momento la plena reintegración foral).

Como consecuencia de este acuerdo, el mismo día de las elecciones municipales se celebrarán en Navarra elecciones para el Parlamento navarro, que estará compuesto de setenta miembros. Los cabezas de lista que saquen más votos en cada circunscripción—las cinco merindades históricas y un sexto distrito más para Pamplona— serán los que formen la Diputación Foral y los que elijan a su presidente (hasta ahora este cargo lo ostentaba el gobernador civil, nombrado por el Gobierno central).

Este Parlamento navarro—al que, por cierto, no se le concede ninguna facultad legislativa— será el que decida sobre la integración en el Consejo General Vasco y después someterá el tema a referéndum. Para ganar, sólo se necesitará mayoría simple. Fue uno de los acuerdos de finales del 77. Había también otra cláusula: el referéndum se celebrará en un clima de paz y convivencia. Es el clima que no existe. Y no parece que vaya a existir por mucho tiempo. ¿Se celebrará realmente el referéndum por el que todos claman? Es difícil predecirlo. Mientras tanto, el pueblo navarro está sobre el tema cada vez más enfrentado, y la provincia—Pamplona sobre todo— se unifica con las otras tres provincias vascas en la espiral del terrorismo, la represión y los policías que llegan y llegan. ■ G. GOICOECHEA.